

Políticas anti-narcóticas ineficaces dañan las a comunidades afro colombianas

Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el mundo necesita repensar cómo está luchando la guerra contra las drogas, un sentimiento compartido por otros líderes latinoamericanos. Teniendo en cuenta que el control de drogas es uno de los temas que se negociará durante la segunda fase del proceso de paz entre Colombia y la guerrilla de las FARC, tal vez veamos cambios en las estrategias de lucha contra la drogas en los próximos meses. Un cambio es especialmente necesario para las comunidades afrocolombianas que actualmente llevan la peor parte de los esfuerzos de las fumigaciones aéreas con herbicidas financiadas por los EE.UU. En 2011 y 2012, se llevó a cabo fumigaciones en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Chocó-regiones pobladas principalmente por afrocolombianos. Las fumigaciones se unen con la riqueza de la minería, la industria y los proyectos de desarrollo que regularmente violan el derecho de estas comunidades a la consulta previa, libre e informada sobre las actividades realizadas en sus territorios.

La fumigación de cultivos de coca se lleva a cabo con el producto químico glifosato comercializado en los Estados Unidos como *Roundup*. Resultados concluyentes sobre la seguridad de largo plazo de glifosato siguen siendo difíciles de alcanzar, mientras que algunos estudios han encontrado que el producto químico no alberga cualidades cancerígenas, la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño afirma que efectos adversos para la salud—especialmente para niños—son una posibilidad innegable. Amplia evidencia anecdótica de las comunidades rociadas sigue suscitando preocupaciones legítimas sobre la sanidad del producto químico. Informes de grupos de comunidades afrocolombianas indican problemas generalizados cutáneos, respiratorios y gastrointestinales en los locales después de llevarse a cabo las fumigaciones. Los más afectados son las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños.

Igualmente preocupante es el daño a la seguridad alimentaria de afrocolombianos y los efectos ambientales de las fumigaciones. La imprecisión en las campañas de fumigación ha llevado a la destrucción de los cultivos alimentarios coca usados para la venta y consumo, incluyendo el plátano, la yuca, el maíz y los campos de arroz. Estos cultivos proporcionan la seguridad básica de alimentos para muchas de las comunidades fumigadas, y una vez destruidos, pueden el desplazamiento de los campesinos. En junio y septiembre del 2012, los alimentos diarios de más de 6.000 habitantes de las comunidades de La Mamuncia-Lopez de Micay en Cauca fueron destruidos, junto con un proyecto de cacao con el apoyo del gobierno de Cauca, que servía como fuente principal de ingresos económicos de esa comunidad.

Además, como la pulverización química se filtra en los arroyos y acuíferos, sus efectos nocivos dañan aun más a los seres humanos y el medio ambiente. Estudios demuestran que el glifosato tiene un efecto negativo en la vida acuática y en la diversidad biológica. El envenenamiento de principales fuentes de agua en comunidades afrocolombianas sigue siendo una preocupación central. En otras palabras, por muy "dirigidos" o "inofensivos" que los programas de fumigación aérea pueden ser en teoría, el daño colateral de la pulverización es impresionante y este daño es muy destructivo para las comunidades rurales afrocolombianas.

Gran parte de este daño ambiental no puede ser simplemente invertido. La costa pacífica de Colombia es una de las regiones con la mayor biodiversidad del mundo. Chocó, por ejemplo, es un hogar de bosques vírgenes con especies de flora y fauna que no existen en ningún otro lugar. La fumigación errante no sólo elimina estas especies de existencia en Colombia, más bien, las conduce a la extinción global. Este tipo de daño al medio ambiente natural está dando lugar a un daño irreparable a la rica cultura y forma tradicional de vida rural de afrocolombianos.

Las fumigaciones también aumentan la ya significativa población internamente desplazada en Colombia. Comunidades vulnerables—especialmente las afrocolombianas e indígenas—son regularmente forzadas a abandonar sus tierras debido a las amenazas, la violencia y el conflicto armado interno. Bajo la amenaza constante de la destrucción de cultivos (incluidos cultivos lícitos) a través de fumigaciones y la violencia conexas entre narcotraficantes y el Estado, estos grupos son regularmente forzados a abandonar sus tierras ancestrales y buscar refugios más seguros.

En 2000, la Asamblea Afro-Colombiana del Consejo Comunitario de Yurumanguí (Valle del Cauca) lanzó una campaña anti-coca con el fin de parar el daño que tanto los cultivos y las fumigaciones estaban causando a la población local. Los líderes conscientes de que los esfuerzos de coca y fumigación fueron incentivando el desplazamiento de la comunidad, destruyendo los cultivos de alimentos, erosionando la seguridad, y que representa una amenaza grave para su integridad cultural se organizaron para defender sus tierras, su cultura y sus derechos políticos. La estrategia consiste en identificar las áreas donde se cultiva la coca, acercando a los productores para explicar los vínculos de la coca a la violencia y pedir que los cultivos ilícitos sean destruidos. Si el agricultor no cede, la comunidad organiza un grupo de personas para erradicar las plantas mismas. A pesar de que este esfuerzo carece de apoyo oficial y ha incrementado las tensiones con los guerrilleros y los cultivadores de coca, sirve como un ejemplo de las respuestas alternativas, basado en la comunidad, a la fumigación propuestas por las comunidades afrocolombianas.

Más allá del Valle del Cauca, grupos afrocolombianos han respondido a las amenazas que plantea el cultivo de coca y los esfuerzos de fumigación. Más de 5.000 afrocolombianos en Chocó salieron a las calles para protestar las fumigaciones en septiembre de 2011, con algunos manifestantes bloqueando la carretera principal hacia el departamento durante varios días. El Foro Inter-Etnico de Chocó (FISCH) y COCOCAUCA, dos agrupaciones regionales de los consejos comunitarios afrocolombianos y organizaciones, han denunciado

públicamente los efectos nocivos de las fumigaciones sobre los afrocolombianos y repetidamente han pedido a las autoridades estadounidenses y colombianas a buscar alternativas a la fumigación.

Lamentablemente, los esfuerzos de las organizaciones afrocolombianas para poner un fin a las fumigaciones han caído en oídos sordos. El daño a la salud, la ecología, y la cultura de las comunidades afrodescendientes sigue tomando lugar a pesar de que no tiene un impacto significativo al tráfico de drogas. Si bien existe un terreno común entre las comunidades afectadas y el gobierno—ambos desean ver el fin del tráfico de drogas en la región— soluciones alternativas y más eficaces para este problema común deben ser alcanzadas. Un primer paso positivo sería que los Estados Unidos y Colombia vean a las comunidades afrocolombianas como socios en lugar de enemigos en sus esfuerzos de controlar las drogas y de consultar con sus líderes sobre la manera mejor de reducir el cultivo de coca en territorios colectivos. La acción unilateral y perjudicial por parte de Colombia en tierras colectivas no sólo es una respuesta inaceptable e perjudicial para el tema de las drogas, sino también ha fallado de manera innegable para cumplir con los objetivos de los EE.UU. y de Colombia de frenar el cultivo de coca. Como Presidente Santos mencionó, un nuevo enfoque es necesario y los EE.UU. deberían seguir su ejemplo y terminar el apoyo a una estrategia de fumigación que es perjudicial para los afrocolombianos e ineficaz en la orientación de la producción de coca.

*Esta entrada de blog es un resumen de una presentación de Gimena Sánchez-Garzoli, Coordinadora de WOLA del Programa de los Andes. Apoyo a la investigación adicional fue proporcionado por Adam Schaffer, Asistente del Programa de Políticas de Drogas y los Andes, y la traducción fue realizada por Joel Martinez.

Ineffective U.S. Fumigation Policy Adversely Affects Afro-Colombians
24 Oct 2012

Recently President Juan Manuel Santos stated that the world needs to rethink how it is fighting drugs, a sentiment echoed by other Latin American leaders. Given that drug control is one of the agenda items to be negotiated during phase two of peace talks between Colombia and the FARC guerillas, we may see changes in strategies against drugs in the coming months. A change is particularly needed for Afro-Colombian communities who are currently bearing the brunt of the U.S.-financed aerial herbicide spraying efforts (“fumigation”) in Colombia. In 2011 and 2012, fumigations took place in the departments of Nariño, Valle del Cauca, and Choco—regions populated primarily by Afro-Colombians. The fumigations join the wealth of mining, industrial, and development projects that regularly violate these communities’ right to free, prior, and informed consultation regarding actions taken on their lands.

Fumigation of coca crops is conducted with the chemical glyphosate—marketed in the United States as Roundup. Conclusive findings on glyphosate’s long-term safety remain elusive; while some studies have found that the chemical harbors no carcinogenic qualities,[i] the United Nations Commission on the Rights of Children argues that adverse health effects—specifically for children—are an undeniable possibility.[ii] Extensive anecdotal evidence from sprayed communities continues to raise legitimate concerns as to the chemical’s safety. Reports from Afro-Colombian community groups indicate widespread skin, respiratory, and gastrointestinal issues on locals after fumigations take place.[iii] Worst affected are pregnant women, the elderly and children.

Equally troubling is the damage to Afro-Colombians’ food security and the environmental effects of spraying. Imprecision in spraying campaigns has led to the destruction of non-coca crops used for sale and consumption, including banana, yucca, corn, and rice fields. [iv] Such crops provide basic food security for many of the communities sprayed, and once destroyed, can prompt displacement of rural farmers. In June and September 2012, the daily

food items of over 6,000 inhabitants of La Mamuncia-Lopez de Micay in Cauca were destroyed, along with a cacao project supported by the Cauca government that served as this community's main source of income.

Additionally, as the chemical spray seeps into streams and aquifers; its harmful impact further damages humans and the environment. Studies show that glyphosate has a negative effect on aquatic life and biological diversity. Poisoning of Afro-Colombian communities' main water sources remains a major concern. In other words, however "targeted" or "harmless" aerial spray programs may be in theory, the collateral damage of spraying is staggering and this damage is highly destructive to Afro-Colombian rural communities.

Much of this environmental damage cannot simply be reversed. Colombia's Pacific coast is one of the world's most biodiverse regions. Choco, for example, is home to virgin forests containing species of flora and fauna that do not exist anywhere else. Errant spraying does not merely eliminate these species from existence in Colombia; rather, it drives them into global extinction.[v] Such damage to the natural environment is leading to irreparable harm to Afro-Colombians' rich culture and traditional rural way of life.

The fumigations also increase Colombia's already significant internally displaced population. Vulnerable communities—notably Afro-Colombian and indigenous peoples—are regularly forced off their land due to threats, violence, and the internal armed conflict. Under the constant threat of crop destruction (including licit crops) through spraying and related violence between drug traffickers and the state, these groups are regularly forced to leave their ancestral lands and seek safer havens.

In 2000, the Afro-Colombian Assembly of the Community Council of Yurumanguí (Valle del Cauca) launched an anti-coca campaign in order to stop the harm that both the crops and the fumigations were causing on the

locals. The leaders cognizant that coca and fumigation efforts were incentivizing displacement from the community, destroying food crops, eroding security, and posing a serious threat to their cultural integrity organized themselves to defend their land, culture, and political rights. The strategy involves identifying areas where coca is grown, approaching the growers to explain the coca's ties to violence and ask that the illicit crops be destroyed. If the grower does not acquiesce the community organizes a group of persons to eradicate the plants themselves. Though this effort lacks official support and has increased tensions with guerillas and coca growers, it serves as an example of the alternative community-based responses to fumigation proposed by Afro-Colombian communities.

Beyond Valle del Cauca, Afro-Colombian groups have responded to the threats posed by coca cultivation and fumigation efforts. Over 5,000 Afro-Colombians in Choco took to the streets to protest fumigation in September 2011 with some protestors blocking the main road to the department for several days. The Inter-Ethnic Forum of Choco (FISCH) and COCOCAUCA, two regional groupings of Afro-Colombian community councils and organizations, have publicly denounced the harmful effects of fumigation efforts on Afro-Colombians and repeatedly asked U.S. and Colombian authorities to seek alternatives to fumigation.

Sadly, Afro-Colombian organizations' efforts to halt fumigation efforts have fallen on deaf ears. The health, ecological, and cultural damage on Afrodescendant communities continues to take place without there being a significant impact on in the drug trade. While some common ground exists between affected communities and the government—both wish to see an end to drug trafficking in the region—alternative and more effective solutions to this common problem must be reached. A positive first step would be for the United States and Colombia to view Afro-Colombian communities as partners rather than enemies in their drug control efforts and to consult with their leaders on how best to reduce coca growing collective territories. Unilateral and harmful action on the part of Colombia in

collectively-held lands is not only an unacceptable, harmful response to the drug issue, but also has failed demonstrably to meet the U.S. and Colombian goals of curbing coca cultivation. As President Santos mentioned a new approach is needed and the U.S. should follow his lead and end support for a fumigation strategy that is harmful to Afro-Colombians and ineffective in targeting coca production.

*This blog posting is a summary of a presentation by Gimena Sanchez-Garzoli, WOLA Senior Associate for the Andes. Additional research support was provided by Adam Schaffer, Program Assistant for Drug Policy and the Andes.

[ii] Naciones Unidas. “Comité de los Derechos del Niño”. Informe sobre el 42 periodo de sesiones, Ginebra, 15 de mayo a 2 de junio de 2006. CRC/C/42/3, 3 de noviembre de 2006
[http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/2e94284ab7747bb7c125725a004d54bb/\\$FILE/G0645145.pdf](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/2e94284ab7747bb7c125725a004d54bb/$FILE/G0645145.pdf)

[iii] “Graves consecuencias de fumigaciones en Novita”, Choco.Org,
http://www.choco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=175:graves-consecuencias-deja-fumigaciones-en-novita&catid=39:informativo-choco&Itemid=70

[iv] “Fumigaciones con glifosato en territorios colectivos del Choco”, Choco.Org,
http://www.choco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=105:fumigaciones-con-glifosato-en-territorios-colectivos-del-choco&catid=39:informativo-choco&Itemid=70